

## Y EL GRINGO AHÍ

---

Sólo unos días antes se habían presentado apresuradamente algunos proyectos de ley al Congreso; aún no se había redondeado el tema del referendo; no había hablado con ningún sector político al respecto, cuando, a finales de septiembre, Uribe Vélez corrió a solicitar el visto bueno del gobierno norteamericano para su programa de gobierno.

Las autoridades de ese país lo recibieron cordialmente, insistiéndole que debía firmar un acuerdo para impedir que ciudadanos estadounidenses fueran llevados a la Corte Penal Internacional; que tenía que apoyar las acciones contra Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU y que debía redoblar la lucha contra el narcotráfico e invertir más recursos propios en la lucha antiterrorista. Con respecto a la petición de Uribe de conceder el Estatus de Protección Temporal, TPS, a los ciudadanos colombianos en Estados Unidos y a la búsqueda de mecanismos para proteger el precio del café, Bush se limitó a anunciar que los estudiaría con cuidado. En el aspecto económico, a Uribe le dijeron que su programa gubernamental iba en la dirección correcta, concedieron la elegibilidad de Colombia para el Acuerdo de Preferencias Andinas, ATPA, y lo despidieron con palmaditas en la espalda. La prensa colombiana tituló: "La plata viene después". Uribe reiteró que continuaría las fumigaciones y el desarrollo y expansión del Plan Colombia, y les encimó un decreto que aseguraba a las multinacionales el monopolio de cinco años sobre los medicamentos nuevos y, siguiendo a México, propuso -unos días antes- que se revisara el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, TIAR, para incluir la intervención continental de ejércitos extranjeros en la lucha contra el terrorismo y contra las "amenazas internas".

Pero el asunto fundamental, como siempre, era la plata. Desde las semanas anteriores se anunció que uno de los objetivos de la visita era solicitar un apoyo directo del Tesoro norteamericano y que las negociaciones con el Banco Mundial y el FMI iban por buen camino. Después del viaje, en octubre, se siguieron negociando los desembolsos. Mientras tanto el ministro de Hacienda, Junguito, no hace sino repetir a los medios que está asegurada la financiación para los cuatro años y que hay garantías de contar con cerca de nueve mil millones de dólares, como si la sola repetición de esta letanía tuviera el poder mágico de detener la fuga de capitales y la devaluación y restaurara la confianza de los inversionista en el país.

Los bancos, los funcionarios y los diversos inversionistas quedaron muy "favorablemente impresionados" con los planes de Uribe para restaurar la seguridad en Colombia y recuperar el control territorial por parte del Estado, pero invariablemente acotaron que lo fundamental son las reformas: tributaria, laboral, pensional, disminución del tamaño del Estado, congelación del gasto público.

La banca internacional tiene razón a su manera, para algo son negociantes; no le prestan dinero a quien no esté en condiciones de pagarlo, no importa qué tantas promesas haga ni qué buenas intenciones manifieste; debe demostrar fehacientemente que dará prioridad al pago de la deuda sobre todos los demás asuntos. Según ellos, si hay problemas de pobreza o recesión para eso está el sector privado que

es eficiente y, el Estado debe utilizar sus escasos recursos focalizadamente para atender los casos explosivos; el libre mercado ajustará las cargas y la globalización asegurará la prosperidad. Para ellos, el gobierno de Uribe no sólo debe proponer las reformas sino hacerlas: ver para creer. Aunque el primer mandatario colombiano les inspira confianza por su talante autoritario y su obsecuencia con los dictados de las entidades de crédito, más valen los hechos que las palabras.

Pero el gobierno de Uribe está produciendo hechos. Su programa está concebido para satisfacer las exigencias norteamericanas, el regateo en el Congreso sobre aspectos puntuales de las reformas se está haciendo, pero la voluntad gubernamental es firme para el ajuste. No es una discusión académica sobre cuál es el "modelo de desarrollo" que le conviene al país; lo que se da es el avance decidido de la dominación norteamericana sobre la economía nacional. Y en esto trabaja incansablemente la administración Uribe.

El panorama no puede ser más negativo. Uribe se obstina en complacer a los prestamistas y ellos ponen condiciones más duras. El FMI pide que se cumplan al pie de la letra sus recomendaciones y no promete nada en caso contrario. Colombia está en su máxima debilidad y su economía es totalmente vulnerable por haber colocado su futuro en manos de bancos internacionales; Uribe suplica al FMI que suscriba un acuerdo para poner a disposición del gobierno 2.000 millones de dólares en los próximos dos años y ha obtenido promesas del BID para permitirle acudir a la ventanilla de emergencia del BID y solicitar 1.500 millones más. El Tesoro no dio plata y los demás dineros del Banco Mundial están en trámite, pero no se puede solicitar fondos a los bancos privados sin los avales de los entes multilaterales.

El verdadero sentido de todas las reformas es seguir endeudando el país. Internamente el Congreso debe hacer una reforma tributaria para obtener 2,2 billones de pesos (ochocientos millones de dólares). Si no se consiguen habrá recesión, dice Minhacienda. La reforma pensional permitirá un ahorro de 100.000 millones de pesos en el año 2003, lo cual es muy poco para la avaricia de los agiotistas. La otra pata del ajuste es disminuir el tamaño del Estado, cerrar y fusionar entidades, despedir funcionarios, para lo cual apenas se está elaborando un proyecto de ley y, a última hora, se les ocurrió incluir en el referendo la congelación de gastos del Estado. Uribe dijo que aprobar las reformas tranquilizaría los mercados y permitiría conseguir los recursos. Mientras tanto, el país es víctima de la especulación: en cinco meses se fueron 800 millones de dólares por la liquidación de portafolios de inversión y el retiro de dineros de los fondos comunes que manejan las fiducias; el capital golondrina levanta el vuelo.

El país podría conseguir dineros de otras maneras; por ejemplo, diversificando las exportaciones y buscando la forma de no depender tan enfermizamente de los dineros extranjeros, y basar su desarrollo en la expansión del mercado interno, la industrialización, el fomento agropecuario y la elevación del nivel de vida de la población. Pero los últimos gobiernos se empeñan en que la única salida posible es aumentar las exportaciones; más como la condición que nos ponen nuestros compradores norteamericanos es que también aumentemos las importaciones, saldría lo comido por lo servido, el déficit en la balanza comercial aumentaría y se haría necesario un nuevo endeudamiento.

Para el fomento de las exportaciones el gobierno tiene como alternativas el ATPA y el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Los eventuales beneficios del ATPA son -en el mejor de los casos-

un aumento de 10% en las exportaciones colombianas a Estados Unidos, pero con condicionamientos que afectan toda la política estatal, como es el caso de un tratado de extradición con Estados Unidos, no nacionalizar ni imponer tributos a las empresas estadounidenses, sujetarse a las disposiciones de tribunales internacionales, no subsidiar las exportaciones, etc. Es la prefiguración de lo que se busca con el ALCA. De esta forma, con unas pequeñas gabelas que concede, Estados Unidos se asegura el control de todo el comercio exterior y de la política de inversión extranjera en Colombia. Las ilusiones en aumentar las exportaciones se ensombrecen aún más cuando se ve que la recesión norteamericana se agrava y el comercio mundial decrece, tanto en volumen como en valor, y se levantan barreras proteccionistas por doquier.

El ALCA, que significaría una profundización de la apertura, tiene un cronograma establecido y en 2005 se firmaría el tratado que vuelve a América Latina el coto de caza de los inversionistas norteamericanos. Su negociación acelerada, la debilidad de los gobiernos para hacer un frente común y las fuertes presiones norteamericanas hacen que la desigualdad característica en las relaciones de América Latina con Estados Unidos, se multiplique con el tratado. Para colmo de males, si el ALCA fracasa, el gobierno de Uribe tiene un Plan B que consiste en un acuerdo bilateral de libre comercio con la potencia del norte, el cual entregaría nuestra economía inerme a la voracidad de los norteamericanos.

Nuestra economía, uncida más que nunca a la norteamericana, atraviesa una grave crisis que nos conduce a la argentinización. Argentina ya aplicó la receta que nos formulan y está como está. De los demás países latinoamericanos ni hablar. ¿Será que el desastre se ha dado por no seguir los consejos del Fondo Monetario Internacional? No. Se dio justamente por seguir a pie juntillas sus exigencias. La solución que dan es la de siempre: profundizar el ajuste. Pero con este se profundizará también la crisis.

Ya han pasado 12 años de apertura y los resultados están a la vista. La población debe percatarse de la amenaza y resistir el embate. El sector del partido liberal encabezado por Serpa, que se mantiene en la "cooperación constructiva con independencia crítica" propone una política de crecimiento económico, de aumento de la demanda, de fomento empresarial y de protección, pero pareciera no percatarse de que la política económica está condicionada por los acuerdos con el FMI y que Estados Unidos inspiró y avaló la política de Uribe. Serpa soslaya la dependencia externa y, como siempre, quiere cambiar el modelo por medio de un amigable compromiso con Estados Unidos, principal interesado en que las cosas sigan como están. Lamentablemente, a la idea de este pacto se ha sumado Lucho Garzón. Falta una actitud de oposición clara y decidida que aclare al país que la conspiración neoliberal está entrando en una nueva profundización.

---